

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857.)—Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este caso con el Editor del Boletín.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS PARES.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 5 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 7 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos.

Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos y Antonio Otero. Colon, núm. 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey Don Alfonso y la Reina Doña María de las Mercedes se encuentran en esta Corte sin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan la Serma. Señora Princesa de Asturias, y las Sermas. Sras. Infantas Doña María del Pilar, Doña María de la Paz y Doña María Eulalia.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Circulares.

Nombrado por Real decreto de 15 de Marzo último Gobernador civil de esta provincia, me he encargado en el día de hoy del mando de la misma.

Y para conocimiento de sus Autoridades, Corporaciones y habitantes, lo hago público por medio de este periódico oficial.

Orense 13 de Abril de 1878.

El Gobernador.

BARTOLOME MOLINA.

El Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Caja de inútiles y huérfanos de la guerra en 7 del actual me dice lo que sigue:

«Excmo. Sr.: El Consejo de Administración de esta Caja en sesión celebrada en 28 de Marzo próximo pasado concedió a los individuos que aparecen en la adjunta relación, las cantidades que en la misma se expresan, en concepto de auxilio provisional, como comprendidos en la Real orden de 28 de Julio de 1876.—Siendo el importe líquido de aquellas 377 pesetas 28 céntimos, tengo el gusto de incluir a V. E. la adjunta letra de cambio

cedida por los Sres. D. Guillermo Rolland y Compañía sobre esa Capital, a la vista y orden de V. E. por la expresada suma, para su distribución en la forma que se indica: debiendo los interesados firmar los recibos que se acompañan por duplicado, los cuales se servirá V. E. devolver a este Consejo para la oportuna salida en Contabilidad y resguardo en esta Caja.—La variación introducida en el procedimiento usado hasta el día, obedece a la necesidad de procurar, en lo posible, el remedio de abusos cometidos por terceras personas, en perjuicio de las desgraciadas víctimas de la guerra, por lo cual no puedo menos de encarecer a V. E. al contar con su eficaz cooperación, la necesidad de evitar a todo trance la intervención de agentes o comisionados, porque de aceptarse vendría a ser sobre inútil, perjudicial por lo que se refiere a este Centro, todo benéfico, y haría casi ilusorio el socorro debido a la generosidad de los que con sus donativos secundaron el magnánimo pensamiento de S. M. el Rey al crear esta Caja.»

Lo que con inclusión de la relación a que hace referencia, se hace público por medio de este periódico oficial a fin de que por conducto de los Sres. Alcaldes de los distritos en que se hallen situados los pueblos que se expresan, llegue a conocimiento de los interesados, quienes desde luego se presentarán a mi autoridad provistos de su cédula personal, de un oficio del Sr. Alcalde a cuya presencia estampen su firma al margen, y el aviso que habrán recibido directamente del Consejo que manda hacerles la entrega.

Orense Abril 11 de 1878.

El Gobernador interino.

JOSÉ BARBEYTO.

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CAJA DE INÚTILES Y HUÉRFANOS DE LA GUERRA.

RELACION de las cantidades que ha concedido el mismo a los individuos que se expresan con la deducción del descuento de cambio, timbre y giro, y puntos de su residencia, con objeto de que sean entregados a los mismos como auxilio provisional con arreglo al cuadro 2.º de la Real orden de 28 de Julio, a cuyo efecto se remite al señor Gobernador civil de la provincia de Orense el correspondiente giro a su orden.

Provincia.	Punto de residencia.	NOMBRES DE LOS INTERESADOS.	Ha correspondido.		Cambio, timbre y giro.		Líquido a percibir.	
			Pts.	Cts.	Pts.	Cts.	Pts.	Cts.
Orense.	Mezquita	D. Antonio Estevez Rodriguez.	250	»	5	15	244	85
Idem.	Paderne.	D. Francisco Gomez Perez.	125	»	2	57	122	43
TOTAL.			375	»	7	72	367	28

Importa esta relacion las figuradas 367 pesetas 28 céntimos.

Madrid 7 de Abril de 1878.—El Brigadier Secretario, Martín Loygorri.

JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO.

Circular.

El Excmo. Sr. Director general del Instituto Geográfico y Estadístico con fecha 12 de Marzo último me dice entre otras cosas lo siguiente:

«La mayor parte de las rectificaciones no exigen de las Juntas provinciales del Censo mas que celo e inteligencia para asegurarse de la verdad de la inscripción y de la exactitud de las operaciones numéricas, sin que ninguna nueva prevención tenga por ahora que hacer este Centro directivo.

No sucede lo mismo con la manera de clasificar la población de derecho, dependiente de la interpretación de las disposiciones vigentes sobre el domicilio legal, ni con las rectificaciones relativas a dicho concepto de los habitantes de cada pueblo.

En este punto y careciéndose de una interpretación auténtica o doctrinal, legalmente autorizada, la Direccion general contestó a cuantas Juntas provinciales le consultaron, resolviendo los casos propuestos con el criterio mas adecuado al espíritu de las leyes orgánicas.

Mas tarde, tratando de averiguar la manera como en todas las provincias se entendían los artículos correspondientes de la ley Municipal, esta Direccion circuló un interrogatorio, que, como era de suponer, no ha sido contestado con la uniformidad deseable en lo relativo a la distinción entre vecinos y domiciliados.

En su consecuencia, es preciso tomar las disposiciones convenientes a fin de que, cuando se dicten por el Gobierno de S. M. las reglas definitivas para la aplicación de la mencionada ley, cuya interpretación gestiona esta Direccion general, puedan hacerse las debidas transferencias en las cifras de los resúmenes.

Con este objeto las Juntas provinciales del Censo procederán desde ahora a exigir de las municipales un estado con los datos necesarios para llenar el cuadro adjunto, que no es otra cosa sino la fiel expresión en

números de la interpretación dada en cada población a la clasificación legal de los habitantes en aquellos casos y conceptos dudosos que en los epígrafes se expresan y que seguramente no exige particular explicación: tanto más cuanto que cada provincia debe tener un solo criterio formado en el seno de la Junta de la capital e impuesto a las municipales, ya de su propia iniciativa, ya por haber recibido comunicaciones de esta Dirección general.

La formación de este estado no debe ser obstáculo, ni para verificar las rectificaciones relativas a las demás casillas de la cédula y a la exactitud de las operaciones, ni para hacer los resúmenes mandados formar por los artículos del cap. V de la Instrucción de 2 de Noviembre último.

Lo que traslado a los señores Alcaldes Presidentes de las Juntas municipales del Censo para que se sirvan disponer que sean cubiertos los dos cuadros que al efecto se les remiten por el correo de este día, devolviéndome un ejemplar a la brevedad posible, con el fin de que esta Junta pueda formar el estado provincial, que por dicha Dirección se le encarga, recomendándole al propio tiempo el más esquisito celo y vigilancia, a fin de conseguir que las cifras que en el referido cuadro se consignen sean de la mayor exactitud.

Ortense 11 de Abril de 1878.—El Gobernador interino Presidente, José Barbeyto.

(Gaceta núm. 99.)
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
AL SENADO.

Las repetidas quejas de las Autoridades y funcionarios mas inmediatamente encargados de velar por la conservación del orden público y por la seguridad personal y la fortuna de los ciudadanos, acerca de la ineficacia de los medios de que actualmente se dispone para llenar tan santos fines; las reclamaciones de muchas personas particulares con igual objeto, no han podido menos de llamar poderosamente la atención del Gobierno de S. M., y le imponen el deber de ocurrir al remedio de un mal que es ya universalmente sentido.

Es notoria la extremada facilidad con que los procesados obtienen su libertad bajo una fianza las mas veces ilusoria, quedando así en aptitud de cometer nuevos delitos. De esta facilidad se acusa por muchos y se pretende hacer responsables, con evidente injusticia, a los Jueces, sin duda porque, desconociendo las disposiciones de nuestro actual enjuiciamiento criminal, atribuyen a negligencia o debilidad de los encargados de administrar la justicia lo que es consecuencia de la ley.

Segun esta, no deben los Jueces conservar en prision a los procesados por delitos a que el Código penal no asigne por lo menos presidio mayor, y ni aun la prision preventiva pueden

decretar sin que el delito objeto del procedimiento merezca segun el Código pena superior a la de prision mayor, que dura, como es sabido, desde seis años y un día hasta doce años. Y como son, por fortuna, muy pocos los delitos de esta clase que se cometen, la gran mayoría de los procesados goza de una libertad que con razon alarma a las personas pacíficas y honradas, que no se consideran eficazmente garantidas por las leyes.

Resulta, con efecto, que la mayor parte de los procesados son puestos en libertad a los tres dias de haber sido detenidos o reducidos a prision provisional, y los hay entre estos que por segunda y tercera vez obtienen el mismo beneficio mientras dura el primer proceso. Esto no puede menos de entibiar el celo bien acreditado de la benemérita Guardia civil, inmediatamente encargada de velar por la seguridad pública, y que tan relevantes servicios ha prestado, al ver que a las pocas horas de entregar al Tribunal un delincuente se pasea este tranquilamente por entre sus mismos aprehensores sin que estos ni otros agentes de la Autoridad puedan detenerlos de nuevo hasta que cometan otros delitos, y aun entonces se repite el procedimiento anterior.

No es el ánimo del Ministro que suscribe, ni esto sería propio del puesto que ocupa, censurar la ley vigente de Enjuiciamiento criminal, desconociendo los nobles y elevados sentimientos que la inspiraron. Reconoce, por el contrario, que tuvo por objeto respetar y proteger la seguridad individual de los procesados por ciertos delitos hasta que una sentencia ejecutoria los declarase culpables. Este es un principio que profesa también el actual Gobierno, como todas las naciones cultas; pero es indispensable hacerle compatible con las exigencias del orden social y con la protección a que tienen incuestionable derecho la propiedad y las personas honradas, que son, por fortuna, en mucho mayor número que los delincuentes.

Este es el punto de la dificultad, armonizar ambos derechos e intereses; y para ello no es posible prescindir de las lecciones de la experiencia, que revelan la urgente necesidad de alguna reforma en nuestra vigente legislación. No es preciso para ello, ni entra en las miras del Gobierno, apelar a medidas extraordinarias ni a leyes excepcionales, que solo pueden autorizar muy apremiantes y graves circunstancias, en las cuales no se halla, por dicha, el país.

Basta restablecer las disposiciones del Código penal publicado en 1843 y reformado en 1850. Esta ley, de carácter ordinario y permanente, hecha para circunstancias normales, y en cuya formación intervinieron los mas esclarecidos Jurisconsultos pertenecientes a los diversos partidos políticos, a nadie puede infundir desconfianza y recelo. La única adición que se hace es solo consecuencia de la alteración que el nuevo Código introdujo en la penalidad de los de-

litos contra el orden público y la seguridad interior del Estado.

Tampoco se piden, como observó el Senado, mayores facultades que las que hoy tienen para las Autoridades y funcionarios administrativos. Todo lo que se refiere a la prision o libertad de los procesados queda exclusivamente confiado a los mismos Tribunales, que conozcan de las causas y que no pueden ser objeto de racional temor de que abusen de sus facultades como no le hay tampoco a confiarles lo que es mucho mas grave, la imposición de las mas severas penas.

El Gobierno de S. M., despues de madura reflexion, ha resuelto presentar a la deliberación y aprobacion de las Cortes este proyecto de ley, completamente ajeno a toda mira política, y en interés tan solo de la sociedad. Los Cuerpos Colegisladores en su alta sabiduria juzgarán si tan laudable propósito se llena con las disposiciones propuestas, y en todo caso harán justicia a las rectas intenciones del Gobierno.

Tengo, por tanto, la honra de someter a la aprobacion del Senado el siguiente

PROYECTO DE LEY.

Artículo 1.º Mientras no se promulgue una ley definitiva de Enjuiciamiento criminal, se observará respecto a prisiones preventivas y provisionales lo dispuesto en el párrafo primero de la regla 25, y en las 31, 34 y 35 de la ley provisional reformada para la aplicación del Código penal de 1850.

Art. 2.º No podrán ser puestos en libertad, aunque presten fianza, los procesados por el delito definido en el párrafo segundo del art. 162, por el de sedición comprendido en el 252 del Código penal vigente, ni los que aun mereciendo pena correccional, segun el mismo Código, ofrezcan por sus antecedentes y circunstancias, a juicio del Tribunal que conozca de la causa, peligro para la sociedad.

Madrid 4 de Abril de 1878.—El Ministro de Gracia y Justicia, Fernando Calderon y Collantes.

(Gaceta núm. 100.)

Circulares.

He dado cuenta a S. M. el Rey (Q. D. G.) de la comunicacion de la Dirección general de la Deuda participando que, conforme se previene en la instrucción de 10 de Noviembre de 1876, expedida por el Ministerio de Hacienda, ha remitido a las Administraciones económicas los títulos del 2 por 100 correspondientes a los atrasos del clero de todas las diócesis, excepto las de Albarracín, Avila, Cartagena, Segovia, Sevilla, Zamora y del antiguo Priorato de San Marcos de Leon, cuyas relaciones no se han recibido todavía en aquel centro por estar pendientes de reparos. Y vistas la citada instrucción de 10 de Noviembre de 1876

y la dictada por este Ministerio en 19 de Octubre del mismo año; siendo ya llegado el caso previsto en la instrucción últimamente citada de dictar las prevenciones necesarias para la entrega de los títulos a los partícipes, S. M. ha tenido a bien disponer que se observen las siguientes reglas, encaminadas a que en la ejecución de este servicio queden debidamente garantidos los intereses de los partícipes y los del Estado:

1.º Los Reverendos Prelados dispondrán que la entrega de dichos valores a los interesados se verifique por los Administradores diocesanos y Habilitados del clero, con sujeción a las liquidaciones personales estampadas en las relaciones formadas por las indicadas Administraciones y aprobadas por la Ordenación de Pagos de este Ministerio. A este fin la Ordenación devolverá a los Administradores uno de los ejemplares en que conste la aprobación acordada por aquel centro.

2.º Los partícipes recibirán en pago de sus créditos los títulos que quepan en su importe; y el residuo, si lo hubiere, en metálico al precio en que se haya hecho la enajenación de estos valores, conforme a lo que se prescribe en la regla siguiente.

3.º Para que puedan ser satisfechos los residuos como se ordena en la regla anterior, los Administradores diocesanos o Habilitados del clero encargados del pago de los atrasos negociarán los títulos necesarios, previa autorización del Prelado y con intervencion de Agente de cambio o de Corredor, publicando la fecha en que se haya hecho la negociación y el precio obtenido en ella.

4.º Los Administradores diocesanos recogerán el recibo de cada partícipe que ha de justificar la entrega de los valores como se verifica actualmente el pago ordinario de las asignaciones del clero, con la diferencia de que ha de englobarse en un solo recibo toda la cantidad percibida, y rendirán la correspondiente cuenta por conducto de la Ordenación al Tribunal de las del Reino en el término de tres meses, contados desde el día en que recibieran los títulos. Los justificantes de dicha cuenta serán la relación que haya servido para hacer los pagos y los recibos de los partícipes, en los cuales habrá de estamparse el número correlativo que figure en la liquidación. A los herederos de los partícipes fallecidos y a los que cobren en virtud de poder se les exigirán los mismos documentos que en tales casos marcan las instrucciones generales.

5.º Los Prelados fijarán la retribución que deba darse a los Administradores diocesanos por el servicio que tienen prestado a

formar las relaciones de créditos del personal que han servido de base para la liquidación de los atrasos del clero, y a los mismos empleados y a los Habilitados por la entrega de los títulos; entendiéndose que el descuento que por ambos conceptos se haga a los partícipes no podrá exceder de los tres cuartos por 100 que señalan como premio de habilitación la Real orden de 20 de Octubre de 1855, y las instrucciones vigentes y a calidad de que ha de ser satisfecho en la misma clase de papel en que se pagan los atrasos estimados por todo su valor nominal. De Real orden lo digo a V. para conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V. muchos años. Madrid 8 de Abril de 1878. — Fernando Calderón y Collantes. — May Reverendos Arzobispos, Reverendos Obispos y Vicarios capitulares.

S. M. el Rey (Q. D. G.) de conformidad con el dictamen de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, ha tenido a bien disponer que los actos de juramento y toma de posesión de los funcionarios del orden judicial y del Ministerio fiscal, así como los expedientes que se instruyen con tal motivo y los que se forman con arreglo a lo establecido en el capítulo 2.º del título 22 de la ley provisional sobre organización del poder judicial para la concesión de licencias y sus prórogas a los mismos funcionarios, se consideren de oficio, no exigiéndose por tanto a los interesados el pago de derecho alguno, y si solo el uso del papel sellado correspondiente en las solicitudes y demás documentos que presenten; y que se entiendan modificados en tal sentido los aranceles judiciales vigentes.

De Real orden lo digo a V. a los fines oportunos. Dios guarde a V. muchos años. Madrid 8 de Abril de 1878. — Fernando Calderón y Collantes. — Sres. Presidentes y Fiscales del Tribunal Supremo y de las Audiencias.

TERCERA SECCION

GOBIERNO MILITAR

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Habiéndose recibido en este Gobierno Militar, de los Cuerpos que expresa la adjunta relación, licencias absolutas, inútiles, limitadas, de semestre, y certificados de libertad para hacer entrega a los individuos que en ella se expresan, y como quiera que en esta oficina no existen suficientes datos al objeto, e creído conveniente dirigirme a V. S. rogándole tenga a bien disponer se inserte dicha relación en el Boletín oficial a fin

de que por los Alcaldes en cuyos Ayuntamientos residan algunos de los individuos, se les prevenga que en el más breve plazo se presenten en esta dependencia a recoger los documentos que les correspondan, advirtiéndoles que si así no lo efectuasen no se les relevará de los perjuicios que por falta de cumplimiento recayese sobre ellos. Orense 10 de Abril de 1878. — El Brigadier Gobernador, Ramon Erenas.

RELACION QUE SE CITA.

Regimiento Infantería del Rey.
Modesto Perez Garcia.
Juan Iglesias Espósito.
Francisco Vazquez Rodriguez.
Juan Diaz Blanco.

Idem de la Reina.
José Rodriguez Ramon.
Benigno Maria Muislas.
José Blanco da Quinta.
Domingo Blanco Espósito.
Indalecio Alonso Nieto.
Constantino Lopez Villarin.
Domingo Bailon Espósito.

Idem de Córdoba.
Francisco Vazquez Vazquez.
José Maria Feijóo.
Ramon Hidalgo Ramos.
José Garcia Peña.
Leandro Martinez Lorenzo.
Bonifacio Rebusto Toro.
José Gimenez Alvarez.
Benito Lobi Incognito.
Juan Gomez Casal.
José Bernardez Perez.

Idem de Zaragoza.
Ramon Santos Fernandez.
Pedro Prieto Gomez.

Idem de Mallorca.
Angel Fernandez Dominguez.
Miguel Rodriguez Fariño.
Juan Gonzalez Bolano.
Victoriano Fernandez Rodriguez.

Idem de Zamora.
Benigno Rodriguez Rodriguez.

Idem de Almansa.
Lorenzo Perez Rodriguez.
Benito Fernandez Gonzalez.

Idem de Guadalajara.
Antonio Andres Fernandez.
Manuel Barrabel Garcia.

Idem de Extremadura.
Ramon Rivas Vazquez.

Idem de Luchana.
Benito Gonzalez Alvarez.

Idem de Asturias.
Serafin Garcia Gonzalez.

Idem de Murcia.
José Fernandez Rodriguez.

Felipe Blas Fernandez.
Juan Manuel Diaz.
José Peaguda Rios.
José Gomez Garcia.

Agustin Santiago Vazquez.
Bernardo Alvarez Seara.
José Delgado Cid.
Evaristo Vazquez Mancebo.
Castor Iglesias Garcia.

Francisco Valina Borrafero.
Francisco Perez Viso.
Constantino Arribe Lamas.
Nicanor Alejandro Prado.

Prudencio Rivas.
Joaquin Carballo.
Francisco Alvarez Alonso.
José Cervero Pereira.

Victoriano Salgado Fernandez.
Jacinto Sanchez Dominguez.
Bartolomé Gomez Fernandez.
Lorenzo Morales Gomez.
Andrés Carrete.

Domingo Rodriguez Losada.
Juan Alvarez Fernandez.
José Diaz Gonzalez.
Manuel Sobrino Ferreiro.

Ramon Atanes Incognito.
Simón Alverte Judas.
José Fornós Barras.
Pedro Fernandez Espósito.

Felipe Cano Sanchez.
Manuel Vega.
Ildefonso Perez.
Ramon Cid Fernandez.
Manuel Francisco Gonzalez.

Juan Manuel Hernandez.
Manuel Dominguez.
Idem de Leon.
Camilo Corral Lopez.

Idem de Málaga.
Antonio Losada Dominguez.
Ignacio Mosquera Vazquez.
Francisco Dominguez Fernandez.

Cándido Arias Vello.
Manuel Gonzalez Iglesias.
Laureano Estevez Viso.
Lorenzo Bernardo Estevez.
Miguel Garcia Justo.

Idem de Garelano.
Vicente Sanchez Sanchez.
Felipe Guede Aspas.
Miguel Gonzalez Vilareha.

Ramon Corral San Payo.
Idem de San Marcial.
Juan Gomez Gomez.

Anastasio Perez Vazquez.
Francisco Soterino Rodriguez.
Camilo Alvarez Incognito.
José Lopez Incognito.

Camilo Cid Brónelas.
José Martinez Mendez.
Juan Dominguez Rodriguez.
Cándido Alvarez Gonzalez.

Crisóstomo Gonzalez Costa.
Juan Valencia.
Aparicio Novoa Rios.
Esteban Alberto Incognito.

Celestino Dominguez Cortés.
Manuel Garcia Porto.
Antonio Ferreiro Franco.

Idem de Otumba.
Felipe Alvarez Martinez.
Antonio Calle Fornós.
Bernardino Pazos Rodriguez.

Indalecio Garcia Torres.
Manuel Alonso Gonzalez.
Francisco Fernandez San Pedro.
Francisco Perez Gago.

Pedro Nogueira Cobelo.
Ramon Berez Rodriguez.
Arturo Millara Ulla.
José Gonzalez Gonzalez.
Camilo Carracedo Gago.
Antonio Arias Arias.

Antonio Ferreiro Freigido.
Luis Martinez Mecedes.
Manuel Moredo Carnero.

Idem de Wald-Ras.
Francisco Ferreiro Alonso.

Idem de Asia.
Ignacio Guisado Incognito.

Idem de Pijo de Ceuta.
Benito Cordera Rivas.
Benito Prol Prol.
Ramon Lopez Blanco.

Idem de Castilla.
José Rodriguez Diez.

Idem de Galicia.
Camilo Rodriguez Perez.

Idem de Albuera.
Manuel Vazquez Rodriguez.

Idem de Galicia.
Manuel Cuñano Reton.
Antonio Villar Santiago.

Antonio Martinez Vazquez.
Ventura Barrios Barrera.
Ramiro Cerdeira Villanueva.

Idem de Valencia.
Benito Muradas Iglesias.
Luis Rodriguez Hermida.

Antonio Gonzalez Rodriguez.
Claudio Gomez Vazquez.
Modesto Quintas Montero.

Orense 10 de Abril de 1878. — El Brigadier Gobernador, Ramon Erenas.

Don Gumersindo Baza y Pallet, Capitán graduado, Pionero de la 2.ª compañía de la Comandancia de Carabineros de Orense.

Habiéndose ausentado del lugar de Arzadigos, del Ayuntamiento de Villardeves de esta provincia, Esteban Prada y José Felipe, vecinos del mismo y naturales, el primero, del mismo lugar y portugués el otro, acusados de agresión violenta a carabineros que conducían una aprehensión en la tarde y noche del 25 del mes próximo pasado, usando de la jurisdicción que el Rey nuestro señor tiene concedida en estos casos por sus Reales Ordenanzas a los oficiales de su Ejército, por el presente llamo, cito y emplazo por primer edicto a dichos vecinos de Arzadigos, señalándoles la Capitanía de Carabineros, sita en esta villa, donde deberán presentarse personalmente dentro del término de 30 días que se cuentan desde el día de la fecha, a dar sus descargos y defensas; y de no comparecer en el referido plazo se seguirá la causa y se sentenciará en rebeldía por el Consejo de Guerra, sin mas llamarle ni emplazarle por ser esta la voluntad de S. M.

Dado en la Villa de Verín a los

9 días del mes de Abril de 1878.
—Bauzá.—Por su mandato, El
Escribano, Vicente Barrio.

QUINTA SECCION.

AYUNTAMIENTOS.

Moreiras.

En cumplimiento de lo prescrito en la ley municipal, según ya se anunció por medio de bando al distrito, se halla expuesto al público por el término que la misma señala, en la Secretaría de Ayuntamiento el proyecto de presupuesto ordinario, para el próximo año económico de 1878 á 1879.

Moreiras Abril 7 de 1878.—El Teniente Alcalde, Severino Perez.—El Secretario, Serafin Morrenza.

SÉTIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Don Domingo Salazar, Juez de primera instancia de esta ciudad y partido.

Hago notorio que en este Juzgado por la Escribanía del que autoriza, pende expediente de jurisdicción voluntaria promovido por D. Antonio Junquera, en representación de su hijo Domingo Antonio Junquera García, menor de edad, y por Lorenza García, viuda y Genoveva Tomasini García, vecinos de esta capital, para conseguir la venta de la casa señalada con el núm. 42 en la calle del Villar de esta población y huerta adyacente en su trasera que les pertenece por terceras partes, por herencia de Teresa Otero Gonzalez, madre y abuela respectiva; en cuyo expediente previa audiencia del Promotor fiscal se acordó la enajenación de dicha casa en pública subasta por los trámites legales, la cual es de nueva planta y contiene bodega, tienda, trastienda con varias oficinas en los tres pisos; confinante al Norte con casa de los herederos de D. Manuel de la Torre, al Este dicha calle del Villar y donde tiene su entrada, al Sur y Oeste casa y huerta de D. Manuel Gomez y á su trasera existe la huerta aneja de dos áreas y 12 centiáreas, habiendo sido todo justipreciado libre de pensión en 7.060 pesetas; y para que pueda tener efecto el remate de la mencionada finca conforme á lo mandado se publica el presente, á fin de que las personas á quienes interese la adquisición comparezcan á hacer sus posturas en esta Sala de Audiencia que les serán admitidas hasta el día 9 del entrante mes de Mayo, en el que y hora de doce se celebrará remate en el mas ventajoso licitador.

Dado en Orense á 9 de Abril de 1878.—Domingo Salazar.—Manuel Casar.

Don Domingo Salazar, Juez de primera instancia de la ciudad de Orense y su partido.

Hago saber: Que en el expediente jurisdicción voluntaria para venta de bienes del menor D. Vicente Romero Rodriguez, de esta ciudad, he acordado que reconociéndose retraso en la inserción del edicto en el Boletín oficial de esta provincia núm. 131, correspondiente al 24 de Marzo último por el que se anunciaba la venta de varios bienes de dicho menor para el día de hoy con el fin de que pueda dársele la publicidad posible por todo el tiempo que determina la ley, se prorogase la subasta hasta el 23 del que rige y hora de once de su mañana en que terminará el remate que tendrá lugar en favor del mejor licitador sin perjuicio de las posturas hechas y admitidas en esta fecha por D. Agustín Rodríguez y D. Francisco Mozo á las casas del Carballino y Arce-dianos, si no fuesen mejoradas, como así bien las que se hagan en el expresado día. Y para que sea conocida esta determinación por medio del expresado Boletín se expide el presente.

Dado en la ciudad de Orense á 11 de Abril de 1878.—Domingo Salazar.—Por mandado de S. S., Francisco Cuevas.

Don Juan Maria Araujo, Juez de primera instancia de la villa y partido de Allariz.

Por esta requisitoria busca y llama á Angel Page, cuyo hijo paradero se ignora, soltero, labrador; natural y vecino del lugar de Miamán, Ayuntamiento de Baños de Molgas, para que en el término de 20 días se presente en la sala de audiencia de este Juzgado para ser notificado y declarar en causa contra el mismo y otros pendiente, por lesiones á Domingo Antonio Nóroa y Angel Prol, de Penouzes; apercibido que de no presentarse, se le declarará rebelde y le parará el perjuicio que haya lugar.

Allariz Abril 10 de 1878.—Juan Maria Araujo.—Antemí, Leandro de Fernandez Miguez.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey Constitucional de España, y en su nombre D. Balbino Llamas Pons, Juez de primera instancia de Ribadavia.

Hago notorio: que en este Juzgado y Escribanía del autorizante se instruye sumario sobre el hallazgo de un cadáver, perteneciente al sexo femenino en la tarde del

1.º del corriente á la orilla del río Miño que pasa por las inmediaciones del pueblo de Pregigueiro, distrito de Melon y punto denominado Caneiro do Crego, que según el reconocimiento practicado é informe de los facultativos, vestía justillo de cuti, color oscuro, ceñido por medio de un cordón de lana, y una camisa de algodón deteriorada, teniendo el resto del cuerpo descubierto. La piel y tegidos blandos se hallaban en estado de putrilago, notándose algunos puntos de la cara, cabeza y extremidades superiores é inferiores desprovistas de los tejidos blandos, por cuya razón no pudo apreciarse la causa que produjo su muerte debiendo datar esta de unos 20 á 30 días; y á juzgar tan solo por los puntos de oxificación de la caja craneal debía tener cuando menos 30 años de edad. Y no habiendo noticia de quien sea dicho cadáver he acordado por providencia de ayer anunciar por medio de edictos su hallazgo para que los parientes del mismo ú otra cualquiera persona, bajo cuyo cuidado estuviere, concurran ante este Juzgado establecido en el segundo piso de la Casa Consistorial de esta villa dentro del término de 20 días siguientes al de la inserción del presente en los Boletines oficiales de las cuatro provincias de Galicia y en la Gaceta de Madrid con objeto de declarar y ofrecerles el procedimiento.

Dado en Ribadavia á 6 de Abril de 1878.—Balbino Llamas Pons.—Modesto Martinez.

Don Benito Rodicio y Gomez, Abogado y Escribano actuario del Juzgado de primera instancia de la Puebla de Trives.

Por la presente y en virtud de providencia dictada por el señor D. Juan Diaz de la Rocha, Juez de primera instancia de este partido, en sumario criminal que se halla instruyendo contra Pedro Conde Nieto, vecino de la Aldea de Arriba, alcaldía de Villar de Barrio, partido judicial de Allariz, por robo á D. Antonio Fernandez de la Lama, en este referido partido, se cita, llama y emplaza á Fermin Caneiro, vecino de Moás, término municipal de Montederramo en este dicho Juzgado, ausente en el Reino de Portugal, para que dentro del término de diez días, contados desde el siguiente al en que tenga lugar la inserción de la presente en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial de la provincia, comparezca á la Sala de audiencia de este Juzgado á prestar declaración de dicho sumario; apercibido que de no hacerlo le parará el perjuicio que hubiere lugar.

Dada en la Puebla de Trives á

9 de Abril de 1878.—El originario, Benito Rodicio.

ANUNCIOS.

LA BURSÁTIL
MADRID:

RELATORES, 26, PRINCIPAL DERECHA.

Compra al contado y á los mas altos precios de Valores Públicos, de Bancos y Sociedades; de Doses y Treses; Personal; Ferro-carriles; Caja de Depósitos; Bonos del Tesoro; Cupones y Carpetas de intereses y de Inscripciones de Ayuntamientos; Requisa y del Empréstito de 175 millones: Recibos al 25; nueve Décimos y Residuos al 28 y títulos completos al 32 por ciento.

Préstamos sobre valores al 6 por ciento anual.

La correspondencia se dirigirá al Gerente de *La Bursátil* y los valores en certificado, para reembolsar su importe.

SOCIEDAD DEL TIMBRE.

DEPOSITARIA.—ORENSE.

De acuerdo la Sociedad del Timbre con las empresas periodísticas, ha creado, para facilitar la suscripción á las respectivas publicaciones, una emisión de talones de suscripción á la prensa divididos en cinco series de las clases siguientes:

Serie A. 0'25 cts. de peseta.

» B. 1'25

» C. 2'50

» D. 6

» E. 10

Dentro del importe de estas series se halla comprendido el del trimestre, semestre ó anualidad de cualquiera de las publicaciones cuya suscripción desee pagarse.

Encargada la Sociedad de la expedición de dichos talones se hallan á la venta en esta provincia desde el 12 del corriente, en la capital en la Expenduría de la Fuente del Rey y en las subalternas en la Depositaria y Estancos del partido.

Orense 10 de Abril de 1878.—El Depositario, Augusto Alvarez Seara.

TRASLADO.

El antiguo y acreditado comercio de José Romero, el Valenciano, que estaba establecido en la calle de las Tiendas, bajos de la fonda de doña Carolina Cuanda, se trasladó á la del Instituto, número 36.

En dicho Establecimiento se continúan despachando la misma clase de géneros que anteriormente, á precios sumamente económicos.

IMP. DE J. M. RAMOS Y A. OTERO.